

**Acuerdo de 15 de enero de 2020, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación de servicios de “Mantenimiento integral de la flota de vehículos propiedad de la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid”, expediente número A/SER-008035/2019.**

Con fecha 7 de enero de 2020 se ha recibido en este Tribunal recurso especial en materia de contratación de la representación de la empresa VT PROYECTOS, S.L. (en adelante, VT) contra el anuncio y los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares del contrato de servicios de Mantenimiento integral de la flota de vehículos propiedad de la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid, dividido en 2 dos lotes, con número de expediente A/SER-008035/2019, que fueron publicados en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid el 20 de diciembre de 2020.

La recurrente en el escrito de interposición del recurso solicita que se acuerde la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación hasta que recaiga resolución del Tribunal ante los graves perjuicios que la continuidad del procedimiento pudiera ocasionar no solo a esta parte sino a otros muchos interesados en la licitación. VT manifiesta en su solicitud que requerir “certificado de fabricantes de determinadas marcas” correspondiente tanto al Lote 1 como al Lote 2 infringe el ordenamiento Jurídico y los principios de buena administración, entre los que destaca, los de concurrencia, igualdad de trato y no discriminación.

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de



2014 (en adelante, LCSP) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite.

Con fecha 13 de enero de 2020 se ha recibido en este Tribunal el expediente administrativo y el preceptivo informe establecido en el artículo 56.2 de la LCSP, solicitando la desestimación del recurso interpuesto y la no adopción de la medida cautelar solicitada de suspensión del procedimiento, alegando inconsistencia de las alegaciones del recurrente y la necesidad que tiene la Dirección General de Emergencias de que se lleve a cabo el servicio objeto del presente contrato.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que



obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente, no se impugna la resolución de adjudicación, sino algún otro de los actos objeto del recurso, cuando el estado de la tramitación del expediente coloca al mismo en una situación similar.

Finalizado el plazo de presentación de ofertas el 14 de enero de 2020, se considera conveniente por este Tribunal que con anterioridad a la apertura de los sobres correspondientes a la licitación de referencia se haya decidido sobre el fondo del asunto, sin que sea previsible que se vaya a producir ningún perjuicio apreciable en la tramitación del procedimiento, dados los breves plazos de resolución de este tipo de recursos.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados y, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por



unanimidad,

## **ACUERDA**

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato de servicios de “Mantenimiento integral de la flota de vehículos propiedad de la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid”, dividido en dos lotes, expediente número A/SER-008035/2019, hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

**EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **1055298159801103510101**